

La pérdida de los derechos, del significado de la experiencia y de la inserción social: a propósito de los desplazados en Colombia*

Daniel Pécaut

Desde 1995 Colombia ha descubierto la ampliación del fenómeno del “desplazamiento forzado”. Hasta esa fecha, los datos estimativos hacían referencia a la existencia de quinientos a seiscientos mil desplazados. Según las evaluaciones más recientes, su número está alrededor de un millón quinientos, lo que significa que constituyen un problema social y político mayor. Refugiados en condiciones precarias se concentran ya en medianas y grandes ciudades, y lo harán aún más en el futuro: todo hace pensar que los desplazamientos forzados van a continuar.

Hasta el momento son pocos los trabajos dedicados a la situación de los desplazados. Se sabe poco de sus experiencias pasadas, no siempre se conoce su ubicación en las ciudades receptoras, y menos la manera como se adaptan. Ignoramos si en la nueva conformación de grupos se mantienen los antagonismos o las solidaridades permanecen, si se desarrollan estrategias individuales o las de cooperación. No siempre está claro si la mayoría desea permanecer allí donde pudieron refugiarse o si prefiere, dadas circunstancias favorables, regresar a sus pueblos y veredas. Somos aún menos capaces de definir una política al respecto.

En este artículo quisiera proponer algunas reflexiones complementarias concernientes al contexto de los desplazamientos actuales como también a las implicaciones de la experiencia del desplazamiento.

1. El reconocimiento del desplazamiento

El desplazamiento es un problema político y social cuya dimensión real no se deja abordar fácilmente. Colombia no ha podido jamás sanear los efectos de otra experiencia masiva de desplazamiento, como fue la de la Violencia de los años cincuenta. Todo hace pensar que se necesitarán varias décadas para saldar cuentas con la experiencia actual, que pesará sobre otras tantas generaciones.

Si el tema de los desplazados no apareció sino recientemente, en el centro de la escena, no es solamente por que se ha agravado singularmente en los últimos años.

Durante mucho tiempo, una gran parte de la opinión pública se acostumbró a vivir en una situación de “ni guerra-ni paz”, reaccionando sobre todo a los acontecimientos de contornos más terribles, a masacres impresionantes, a magnicidios, a atentados terroristas, y manifestándose especialmente sensible a fenómenos de violencia urbana que la afectaba directamente como los sicarios y las bandas juveniles. Pero no tomó conciencia sino muy tardíamente de las transformaciones profundas que la violencia había producido, de la expansión de las guerrillas, de las nuevas estrategias territoriales de los paramilitares o de la continua expansión del cultivo de la droga.

Para que se alcanzara a comprender lo que estaba aconteciendo no bastaba con que se multiplicaran los desplazados en las ciudades. Se necesitaba, también, que la opinión pública y sus voceros adoptaran nuevas categorías para pensar los fenómenos de la violencia.

Mientras tales fenómenos fueron percibidos como una suerte de mal crónico que golpeaba ciertas zonas rurales o como el resultado de una economía de la droga inducida desde el exterior y que tendría sus lados buenos y malos, los desplazamientos no podían aparecer sino como realidades capilares e individuales. Por supuesto no era posible ignorar la campaña de exterminio que

* Ponencia que el autor presentó en el Foro Internacional “Desplazados internos en Antioquia”, organizado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) Italia.

golpeaba a la Unión Patriótica, ni tampoco las acciones de desestabilización realizadas por los narcotraficantes o el aumento del poder de la guerrilla y de los paramilitares. Pero no se quería reconocer que todo esto engendraba verdaderas situaciones de terror en diversas regiones. Muchos, sin duda, sabían que en las ciudades como Barrancabermeja o Apartadó existían fronteras invisibles entre los barrios bajo la tutela de uno u otro grupo y que los habitantes vivían en medio del miedo. Pero Colombia es un archipiélago: lo que sucede en una región no parece necesariamente ser susceptible de difundirse hacia las otras.

Los portavoces de la opinión pública llevaban a cabo lo que puede llamarse una negación colectiva, en la medida en que no se solidarizaban verdaderamente con alguna de las partes en conflicto; sin ubicarse ante lo que parecía un enfrentamiento confuso donde los protagonistas de la violencia combinaban a su manera todas las formas de lucha, pronunciando discursos políticos, acaparando recursos financieros y utilizando métodos de gran delincuencia, se negaban a reconocer que una buena parte de la población estaba sometida a una verdadera situación de guerra.

Recién cuando la polarización de los enfrentamientos se volvió evidente las percepciones comenzaron a cambiar. El empuje de las fuerzas paramilitares y las masacres sistemáticas que lo acompañan, la expansión de las guerrillas y el fortalecimiento de su capacidad militar han quebrado la banalidad de la violencia. Sólo así, se ha podido tomar conciencia de la existencia de poblaciones que están en medio de fuegos cruzados, sometidas al terror, en amplias regiones del país. Los fracasos de las fuerzas militares, que empezaron con la operación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Las Delicias y siguieron con varios otros reveses, acabaron por convencer que el conflicto ya no tenía mucho en común con la violencia rutinaria. Fue entonces cuando el problema de los desplazados emergió a plena luz. El recrudecimiento de los enfrentamientos y los desplazamientos masivos de poblaciones no son más que dos caras de una misma situación.

El tema de los desplazados está, ahora sí, en la agenda nacional. Pero aún así suscita incomodidad. El Congreso ha aprobado una ley pero se sabe que ninguna ley, por si sola, hace una política y el gobierno parece tener dificultad en adoptar alguna. Las autoridades locales no muestran gran afán por ocuparse del tema: además de las dificultades financieras a las que se ven enfrentadas, insisten en que los desplazados engendran tensiones sociales y que una ayuda a su favor contribuye a fijarlos definitivamente en el sitio donde sea otorgada. Aún las organizaciones no gubernamentales tienen dificultades para identificar los objetivos a seguir, cuando se trata de ir más allá de las acciones asistenciales de primera necesidad. ¿Se debe buscar la instalación definitiva de los desplazados en las ciudades o, por el contrario, se debe favorecer el regreso a sus lugares de origen, cuando éste es posible? Existen diferentes respuestas a esta pregunta que dependen de la manera como se interpreta la violencia y sus posibles salidas.

2. La pérdida de la inserción social, del significado de la experiencia y de los derechos

En el libro *El Imperialismo*¹, Hannah Arendt comenta la situación de los desplazados europeos en el período del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del traslado de los desplazados hacia otros países, llamados “apátridas” a pesar de ellos. Su tragedia, dice Arendt, se puede leer en un triple plano.

Consiste, en primer lugar, en el hecho de que los desplazados han sido arrancados de los puntos de referencia de su identidad personal y colectiva e inclusive de aquellos que marcan su memoria. La pérdida de su “residencia” no es sólo una pérdida de propiedades, sino de todos los elementos que los enmarcan en una tradición que es parte de su individualidad. La pérdida de la residencia, escribe

¹ *Hanna Arendt. L'Imperialisme. París, Fayard, 1982*

Arendt, significa “la pérdida de toda la trama social en la cual se ha nacido, y en la cual se ha organizado un espacio particular en el mundo”².

En segundo lugar, la tragedia consiste en que la expulsión no se origina en una oposición explícita al régimen sino en su pertenencia a categorías negativas basadas en características consideradas como “naturales”: se trata simplemente de que “nacieron en una mala categoría de raza o de clase”. Son entonces “inocentes” golpeados por una persecución política carente de sentido para ellos.

Finalmente, la tragedia proviene de que los apátridas se encuentran desprovistos de todo derecho. Los derechos, los que se han definido a lo largo del siglo XIX, están relacionados con la pertenencia a una comunidad nacional. Los apátridas son por principio los “sin derechos”. Su gran desgracia, comenta Arendt, es la “de haber dejado de pertenecer a una comunidad. Su tara no es que no son iguales frente a la ley, sino que no existe para ellos ninguna ley”³.

Los desplazados colombianos no son apátridas: son miembros de una comunidad política pero, en muchos aspectos, se parecen a los apátridas. Han sido sustraídos a su “trama social”; han sido privados de vínculos sociales que les pertenecían en su lugar de origen. Muchos de ellos tienen familiares muertos en el conflicto, la mayoría de las unidades familiares se han resquebrajado y basta ver los hogares de los desplazados compuestos por mujeres solas. La ruptura de la memoria está en el centro de su experiencia.

Los desplazados no pueden sino apelar a su “inocencia”. En la mayoría de los casos, no han sido expulsados por haber tomado parte activa en las confrontaciones. Si la raza o la clase no es la causa, su lugar de residencia sí lo es, ya que tuvieron que huir porque habitaban en tal o cual zona. No es frecuente tampoco que logren conferir un sentido a lo que les ha sucedido. Los conflictos en su región de origen no responden a objetivos con los que se identifican.

Son, ellos también, los “sin derechos”. Es cierto que disfrutaban teóricamente de los derechos de todos los ciudadanos colombianos y que pueden reclamar el estatuto jurídico de los desplazados. Pero esos derechos son abstractos ya que no poseen los medios para hacerlos valer. Por un lado su desorganización, por el otro las presiones a las que están sometidos, los privan de la posibilidad de actuar colectivamente. Saben que están catalogados como “desplazados” y que los desplazados se vuelven frecuentemente “sospechosos”. Los mismos refugiados en una ciudad, por el hecho mismo de provenir de una zona determinada, se exponen a ser catalogados como pertenecientes a un grupo u otro, a pesar de que muchos de ellos buscan mezclarse con la población de su nueva residencia para evitar ser estigmatizados como actores de la violencia.

Aunque no son apátridas, los desplazados colombianos viven la experiencia de la triple pérdida descrita por Arendt: pérdida de la inserción social, del significado de la experiencia y de los derechos.

Es cierto sin embargo que la suerte de los desplazados colombianos se diferencia en diversos aspectos de la corrida por los refugiados europeos. Hay que subrayar que los desplazados colombianos no han tenido jamás acceso a una ciudadanía plena y total. Se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir bajo el signo de la violencia y no pueden esperar encontrar un refugio seguro ni siquiera en las grandes ciudades. El desplazamiento no es, así, una simple coyuntura sino que es vivido como una condición social casi permanente.

² *Ibid.* p. 276

³ *Ibid.* p. 278

3. La negación de la ciudadanía y las lógicas de protección

La ciudadanía supone, además de derechos y deberes reconocidos por el Estado, la atribución a los individuos de la dignidad ligada a su pertenencia a una comunidad política nacional. Pero muchos son los desplazados que no han tenido jamás acceso a tal ciudadanía, sobre todo entre quienes provienen de las zonas de colonización más o menos reciente.

En Colombia el acceso a la tierra ha sido siempre incierto, ligado a mediadores políticos. Ya en 1930, en ciertas zonas cafeteras, los colonos no poseían la tierra sino a través de intercambios con los jefes políticos locales; estos ayudaban a los colonos a recibir tierras a cambio de sus votos y los votos aseguraban a aquellos jefes los recursos políticos para llevar a cabo las transacciones políticas con las autoridades departamentales o nacionales. Además, no faltaron casos en los que los títulos de propiedad eran de hecho revocables. Por ejemplo, el pueblo de Trujillo, en el norte del Valle del Cauca, estudiado por Adolfo Atehortúa⁵, donde se muestra cómo, a lo largo de cincuenta años, las estrategias personales de los jefes políticos podían en todo momento llevar a la expulsión de los colonos. En zonas de colonización reciente, como la Amazonía, Urabá o el sur del Cesar, la obtención de los títulos de propiedad sigue siempre con retraso la ocupación de la tierra y en muchos casos no llega a obtenerse.

Alfredo Molano describe perfectamente el peregrinaje de los colonos amazónicos, obligados a revender las mejoras logradas en sus terrenos a quienes poseen capitales y a ubicarse cada vez más lejos. En Urabá, el empuje de los grandes dominios, en manos de los propietarios tradicionales o de los “nuevos ricos” (los narcotraficantes), ha expulsado a los colonos. Estamos lejos del estatus del campesino europeo, heredero de generación en generación de las tierras familiares. Para utilizar la expresión de Arendt, la garantía sobre la propiedad de la tierra es lo que engendra una inserción en la “trama social”: es portadora de una memoria y de un futuro por medio del cual el individuo se reconoce como persona.

En Colombia, la relación con la comunidad nacional sigue siendo en cierta medida una ficción y prevalece la dependencia de redes particulares de poder. También en Europa la inserción de los campesinos en la política nacional fue un largo proceso, durante todo el siglo XIX, y fue largo igualmente el período de dependencia respecto de los “notables”. Sin embargo, la situación colombiana difiere de la europea ya que los colonos pueden sufrir sanciones, incluyendo la expulsión y a veces la muerte, cuando no se someten al orden establecido por el líder local. Un vez más, el caso de Trujillo aporta la prueba de que, en un municipio rico y situado cerca de importantes ejes de comunicación, la violencia manejada por un gamonal alcanza a tener el rango de regla social. Con mayor razón, en regiones de población reciente, los colonos se encuentran sin otra alternativa que plegarse a la tutela de cualquier grupo político que disponga de medios de fuerza.

Tales grupos pueden ser manejados por los políticos tradicionales pero también por la guerrilla y, recientemente, por los paramilitares. Cuando estos grupos ejercen su poder por largo tiempo, terminan por engendrar comportamientos de identidad colectiva. En Trujillo, la identidad colectiva provenía del prestigio departamental reconocido al gamonal. En las zonas de Urabá, donde las Farc

⁵ Adolfo Atehortúa. *El poder y la sangre. Las historias de Trujillo, Valle. Cali, Gobernación del Valle del Cauca, 1996*

han estado presentes desde la llegada de los primeros colonos (como en las veredas de San José de Apartadó o Belén de Bajirá), los habitantes han interiorizado los comportamientos exigidos por la organización armada. En los dos casos se evidencia una identidad delegada, mientras que la subordinación a los agentes políticos va a la par con la prohibición de toda acción colectiva autónoma. En lugar de la ciudadanía, de los derechos y de formas de acción propias, predomina la obediencia hacia quienes se han apoderado del poder.

En los últimos años, diversos autores han hecho referencia a la lógica de protección que mantiene generalmente la relación de los habitantes con estos poderes. Han subrayado además la desorganización y la violencia cotidiana que existía ya entre los colonos, particularmente en las zonas de cultivo de la coca, antes de que las organizaciones armadas se implantaran e instauraran reglas para dirimir los conflictos y sancionar las infracciones. Esta es una manera de retomar el análisis en términos de acción racional, como lo ha desarrollado Diego de Gambetta a propósito de los fenómenos mafiosos del sur de Italia⁶.

Pero tales análisis tienen sus límites en el caso colombiano. Por ejemplo, la coerción utilizada por los núcleos de poder toma generalmente rasgos arbitrarios o excesivos y la protección se parece fuertemente al terror. Es así como en los primeros años del decenio del ochenta, un frente de las Farc (en el Magdalena Medio) comenzó a practicar el secuestro de manera indiscriminada con toda la población. Así, la problemática de la extorsión reemplaza la de protección. Se han multiplicado desde entonces casos similares. Es muy probable que si los habitantes de los barrios de Barrancabermeja bajo la influencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) o de los paramilitares pudieran alzar la voz, revelarían que el orden que les ha sido impuesto se parece a una disciplina carcelaria. Por otra parte, el valor de la protección desaparece cuando surgen otros protagonistas: los límites de las zonas se vuelven inciertos y la gente descubre que mañana puede caer bajo la tutela de otro protector. A la población no le queda entonces como recurso sino adoptar un perfil lo más bajo posible mientras se produce el reemplazo de grupo. En este contexto toda noción de derecho es absurda.

La noción misma de desorganización es discutible. Es cierto que en algunas zonas de colonización convergen poblaciones de origen muy diverso. En las plantaciones bananeras de Urabá coexisten paisas, chilapos y chocoanos. En las zonas de cultivo de coca y amapola, los colonos rurales de todas las procedencias se mezclan con individuos de origen urbano. ¿Debe concluirse que esta mezcla implica necesariamente desorganización y violencia? De hecho en muchos casos, los colonos manifiestan una notable aptitud para organizarse por medio de las Juntas de Colonizadores, del rol de los “fundadores”, etc. La desorganización y la violencia surgen a gran escala sólo cuando comienzan a circular recursos monetarios abundantes y cuando comienzan a ejercer influencia los actores organizados de la violencia.

Lo cierto es que muchos colonos se ubican en un horizonte de corto plazo. Pretenden permanecer sólo el tiempo necesario para acumular algunos medios económicos. Un estudio ha mostrado la gran rotación de la mano de obra en las plantaciones de banano a comienzos de los años ochenta. En las zonas de la droga la mayor parte de los colonos se consideran de paso y por lo tanto no hacen nada para mejorar su hábitat. Pero esta limitación del horizonte temporal prevalece aún más cuando la violencia organizada invade la escena y las lógicas de protección pierden su utilidad. En cuanto a la conciencia de ciudadanía, difícilmente pueda tener mucha sustancia en el cuadro de semejante horizonte temporal.

⁶ *Diego de Gambetta. The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection. Cambridge (Mass.), 1993*

Tampoco puede conseguirla cuando las instituciones formales parecen singularmente abstractas y lejanas. La ciudadanía implica ante todo el sentimiento de pertenecer a un conjunto social concreto y de beneficiarse de las garantías que ofrecen las instituciones. Tanto lo uno como lo otro son escasos en muchas regiones. El “sentimiento comunitario” no puede ser sino frágil, menos en razón de la heterogeneidad de la población que de las presiones ejercidas por las redes políticas. En cuanto a las instituciones, su presencia no se mide sino por las ocasionales inversiones realizadas por el Estado. Ahora bien, tal presencia se define también en el plano simbólico y el hecho es que están ausentes a menudo los actores capaces de dar sustento a cualquier proceso de institucionalización simbólica. Los jueces, los policías, los alcaldes y los concejales municipales se vuelven participes de las interacciones que van definiendo las reglas de hecho de los juegos locales. Tienen que formar parte de las redes organizacionales prevalecientes, luchar por la apropiación del poder, negociar con los protagonistas de la violencia. Nada más lejos de la institucionalidad democrática.

Para muchos de los habitantes de una zona bajo la violencia el Estado toma frecuentemente el aspecto de los militares, que inspiran generalmente tanto miedo como los otros protagonistas de la violencia, y aún más. Y ello no solamente por los “deslices” que cometen; su imagen se ve deteriorada también por sus frecuentes compromisos con intereses inconfesables. El caso de Trujillo ofrece, una vez más, un ejemplo al respecto, puesto que la masacre de 1991 no hubiera sido posible sin la colaboración entre militares y narcotraficantes. Esta complicidad con los paramilitares ha aparecido a la luz después en muchas zonas y la población ha aprendido a adivinar la inminente incursión de los paramilitares a partir de las disposiciones tomadas por los militares. No faltan tampoco los casos en los cuales los militares parecen adherir a las representaciones de las élites civiles, identificando espontáneamente a los colonos como los “bárbaros”. Pero si la animosidad frente a los militares supera generalmente a la que inspiran otros protagonistas, ello se debe también a que no buscan salvo excepciones una presencia estable con la protección que ésta implica; proceden en cambio frecuentemente a realizar operaciones fugaces en las zonas bajo el dominio de la guerrilla, retirándose tan rápido como han llegado, sin dejar el tiempo a la población de establecer las estrategias de adaptación. A través de ellos, el Estado es visto entonces como un Estado peligroso, que obliga en muchos casos al desplazamiento forzado.

Los desplazamientos forzados no afectan la existencia de individuos que estarían asegurados por su calidad de “ciudadanos”; afecta en cambio a poblaciones acostumbradas a adaptarse en cada momento a las formas de coacción que pesan sobre ellos. Poblaciones que no ignoran que son desde siempre desplazados en potencia.

4. El desplazamiento: una representación instalada en la larga duración.

La violencia es parte de la experiencia de la casi totalidad de los individuos. Si se les pregunta a los colonos por que llegaron a establecerse en una región determinada, responden casi unánimemente: “por causa de la violencia”. Ese lugar común merece ser cuestionado.

La alusión a la violencia no se refiere siempre al episodio de la Violencia de mediados de siglo. Puede referirse a las huellas más o menos imaginarias dejadas por las guerras civiles, como lo muestra el poblamiento de Trujillo donde se mantiene la referencia a la guerra de los Mil Días. También puede estar basada sobre los recuerdos del periodo posterior a la Violencia. Sin embargo en la mayor parte de los casos sigue siendo el episodio de la Violencia el que sirve de marco constitutivo de la memoria. Poco importa que dos generaciones se hayan sucedido después. Todo sucede como si el presente no hubiera sido jamás otra cosa que la continuación de ese periodo. Las marcas que ha dejado, directas o no, se encuentran en las representaciones que los colonos tienen del mundo social y político.

Los recuerdos de la Violencia alimentan la representación de un primer desplazamiento masivo de población. Aunque los padres o los abuelos se hayan establecido en otras zonas rurales o en la

ciudad, el traumatismo transmitido permanece casi siempre vivo como si, desde entonces, la vida social hubiera estado afectada por la inestabilidad.

Estos mismos recuerdos testimonian constantemente que la noción de comunidad nacional carece de contenido. La Violencia ha inculcado una convicción: la división entre comunidades cuenta más que la pertenencia a una misma nación. Tampoco los partidos tradicionales, aún en su mejor -o peor- época fueron comunidades unificadas. Aún durante la Violencia siguieron siendo coaliciones precarias de múltiples redes de poder; tanto o más que un proceso de división, la Violencia favoreció procesos de fragmentación. No es sorprendente que para muchos colombianos la idea nacional no tenga un contenido muy preciso y que sean referentes más importantes los poderes legales o ilegales.

Colaboró en la perpetuación de la memoria de la Violencia que, cuando finalizó el episodio, ni los gobernantes ni las otras elites sociales hayan hecho la menor tentativa para dar cuenta de lo sucedido y de sus responsabilidades. La fórmula del Frente Nacional ofreció un epílogo político, que se puede juzgar bueno o desastroso, pero que fue, también, un acuerdo para imponer silencio sobre los años recientes. Ningún tribunal se constituyó para juzgar a quienes iniciaron la Violencia: las clases populares fueron las únicas enjuiciadas. Hubo unanimidad entre las elites socio-políticas para acusarlas por su falta de educación, por su “barbarie”, etc. Así, las víctimas tuvieron que asumir toda la responsabilidad por la tragedia que habían vivido. Más aún, no pudieron insertar su experiencia personal en una narración colectiva que hiciera acceder a la Violencia al estatus de drama colectivo y socialmente reconocido, como aconteció con dramas que acompañaron la historia de otros países.

En semejantes condiciones, la memoria no puede sino tomar caminos más problemáticos. Para muchas personas se trata del recuerdo de una humillación que no ha encontrado hasta ahora ninguna expresión política. Se manifiesta también frecuentemente a través de la percepción de itinerarios familiares o individuales de un lugar al otro. Pero para casi todas las personas toma la forma de un imaginario según el cual lo social y lo político están condenados a ser atravesados permanentemente por la violencia, puesto que ésta constituye la realidad oculta de las relaciones sociales. Se trata de un imaginario colectivo pero que no existe sino refractado a través de las experiencias individuales y que se traduce en una desconfianza radical hacia las instituciones. Inclusive el lenguaje del derecho no parece ser sino un engaño; todos saben que no es más que un recurso más al servicio de estrategias meramente instrumentales, cuando no ilegales, que van construyendo reglas de hecho, las únicas que sirven.

No todos los movimientos migratorios de la población durante los años sesenta y setenta están conectados con las secuelas de la Violencia. La ocupación progresiva de las tierras libres se hubiera producido de todos modos: muchos colonos partieron libremente con la esperanza de encontrar mejores condiciones de subsistencia. Pero aún en este caso, estaban convencidos que su migración fue una consecuencia de la violencia. La Violencia es una experiencia histórica fundadora de la que todo parece derivar. Desplazamiento forzado y migración voluntaria pueden ser percibidos en los mismos términos: los de una violencia que continúa. Y el desplazamiento forzado aparece frecuentemente, como la migración, siendo parte del orden de las cosas.

En entrevistas que realicé a nuevos desplazados, lo que más me llamó la atención fue constatar que lamentan menos la pérdida de sus casas que las de sus pobres pertenencias, los productos de sus parcelas, los animales. Como si la residencia no fuera más que una estación precaria, un itinerario sin fin, mientras que estos bienes les permitirían comenzar otra etapa.

5. Lo nuevo en el desplazamiento

Ya observé que la violencia actual tiende a tomar localmente la forma de una guerra civil como sucedió en el caso de la Violencia. Recurre cada vez más a los mismos métodos de terror. Sus

protagonistas, los paramilitares sobre todo, ya no se contentan con matar, sino que repiten las prácticas descritas por María Victoria Uribe: mutilan los cuerpos con el fin de demostrar que están dispuestos a destruir hasta los últimos restos de lo que es un humano⁷. No se trata de procedimientos “naturales” y no estaban difundidos en los años ochenta. Atestiguan que se ha producido una reinención de la tradición como si, para sembrar el terror, bastara con volver a los ritos de la anterior Violencia y acudir a la memoria que de ellos se conserva. Sin embargo, la violencia actual se distingue claramente en muchos aspectos de la Violencia anterior.

En primer lugar debe anotarse que la población está lejos de identificarse con los actuales protagonistas, como sí lo hizo, directa o confusamente, con los actores de la Violencia. Durante este episodio la población se identificaba con los partidos tradicionales así como lo hacían también los actores organizados, aún cuando persiguieran objetivos múltiples. Los protagonistas actuales pueden tener por cierto sus simpatizantes, pero la inmensa mayoría de los habitantes de las zonas de violencia no se reconoce en ellos ni considera que actúen en función de una línea divisoria que tenga sentido para el país. El recurso al terror y al horror encuentra aquí una explicación. Se pretende implicar a la población, sometiéndola y obligándola a huir, demostrando que toda neutralidad es imposible.

Una segunda diferencia reside en que los protagonistas de la Violencia anunciaban en voz alta, claramente, las razones por las cuales combatían y cuando no lo hacían sus razones eran evidentes para todo el mundo. Los protagonistas actuales son menos elocuentes. Es indudable que los dirigentes nacionales comenzaron a expresarse a partir del momento en que se comenzó a hablar de negociación. Pero en las localidades permanecen callados la mayor parte del tiempo. Desde hace mucho tiempo renunciaron a convencer; les basta con controlar los habitantes sin interesarse mucho en sus sentimientos. Se descubre aquí otro origen de la reanudación de las prácticas del terror: éstas substituyen al lenguaje. No hay necesidad de lanzar discursos: las prácticas hablan por sí solas y su interpretación no plantea duda alguna.

La violencia actual se diferencia además por otro hecho: las fronteras que separan un grupo de otro son infinitamente móviles. En los tiempos de la Violencia, las fronteras espaciales entre un campo y otro terminaban por ser evidentes: había municipios liberales y municipios conservadores. Hoy no es así. Las fronteras se desplazan sin cesar según el ritmo de los avances de un bando o del otro, y más cuando los paramilitares logran desalojar a la guerrilla. Esta guerra tiene un giro más moderno puesto que sus protagonistas armados son capaces de golpear lejos de sus bases principales. Los paramilitares logran realizar acciones en zonas de guerrilla, lo mismo que a la inversa. En estas condiciones las poblaciones no tienen ninguna garantía de estar al abrigo del terror. Saben que la protección otorgada por un grupo u otro sólo tiene una validez limitada; han aprendido que cuando el control de una zona pasa a manos de otro protagonista armado, son ellos quienes tendrán que responder por todos los gestos que hayan realizado y serán castigados por el más mínimo.

Hay otra novedad respecto a los años cincuenta: la violencia destruye todos los mecanismos de confianza. La confianza en los actores armados, cuando existía, se derrumba ya que muchos de los habitantes han vivido la experiencia de las promesas no cumplidas cuando llega la hora y han visto al protector dejar, sin vacilar, a la población librada a su propia suerte. Nadie ignora que muchos guerrilleros y milicianos se han pasado a las filas de los paramilitares y que serán ellos quienes “señalarán” luego a los sospechosos. La literatura sobre los traumatismos de guerra muestra abundantemente que la confusión de los civiles no es jamás tan grande como cuando se ven enfrentados a los actos de quienes cambiaron de bando.

En fin, la violencia actual rompe la confianza en el interior de la misma población porque cualquiera puede tener un vecino o un pariente que milita con el adversario. La ley del silencio que

⁷ *María Victoria Uribe. Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima, 1948-1962. Bogotá, Cinep, 1992*

reina en las zonas de violencia no es solamente el reflejo el terror sino que tiene que ver con una desconfianza generalizada. Los desplazamientos se efectúan en medio de ese terror y de esa desconfianza.

Es realmente problemático hablar globalmente de los desplazados. Los desplazamientos acontecen en condiciones muy diferentes con consecuencias también diferentes. Se dan desplazamientos “organizados” donde los habitantes se dirigen hacia una localidad cercana, en principio provisoriamente, para huir del terror que están viviendo. Tales desplazamientos no siempre son espontáneos. En muchos casos se dan bajo el control de un grupo armado, más específicamente de la guerrilla. Todos los testimonios muestran que, cualquiera que sea el sentimiento de los desplazados hacia su “protector”, el éxodo se vive como una prueba terrible y seguramente será el preludio de una salida inevitable y de manera definitiva de la zona de origen.

Otros desplazamientos son la respuesta a amenazas o asesinatos; quienes parten sólo tienen pocos instantes para escapar. Existen así mismo desplazamientos masivos que llevan a la desocupación de una toda una zona. También hay desplazamientos individuales, a cuenta gota. Estas diferentes modalidades influyen en el sentido que los desplazados dan a su situación.

En casi todos los casos, el desplazamiento toma finalmente el aspecto de una aventura individual o familiar. Donde existían solidaridades, éstas se dislocan fácilmente aunque los refugiados se reagrupen por procedencia y establezcan mínimas formas de cooperación con personas conocidas, pero posibilidades de solidaridad mas extensa están minadas por la extensión de la desconfianza. Desconfianza que está en la base de un proceso de individualización acompañado por la impotencia de los individuos para asumirse como responsables de su existencia.

Se suma, además, la incertidumbre. Hay desplazados que parten “para siempre” mientras que muchos piensan regresar. Interviene aquí nuevamente el corto plazo que inhibe cualquier proyección sobre el futuro.

La experiencia individual de los desplazados es como una explosión de todos sus puntos de referencia. No es casualidad si en las entrevistas se refieren a menudo a visiones muy contradictorias. Llevan las sensibilidades que adquirieron donde vivían y mantienen a veces un discurso marcado por la influencia de las guerrillas si es que su zona de origen estaba bajo control de estas, al mismo tiempo ya no creen en los actores armados. Esperan la ayuda del gobierno y de las otras autoridades pero son portadores de una nueva humillación que alimenta su falta de confianza en las instituciones. Quieren protestar pero no confían en las posibilidades de acción colectiva. Más allá de su identidad social, es su identidad como sujeto individual la que está puesta en tela de juicio.

6. El aislamiento en los espacios urbanos

Lo que les queda en común a los desplazados es el miedo y las imágenes del terror que transportan con ellos. Un miedo y un terror que, aún cuando se ubiquen en otro sitio, no los abandona. Porque la desconfianza subsiste hasta en las ciudades.

En este sentido la situación actual también se distingue de la de los años cincuenta. Durante la Violencia, las ciudades eran refugios más o menos seguros para los desplazados. Es cierto que los asesinatos urbanos de los desplazados no estuvieron ausentes en esos años y se sabe que los “pájaros” golpearon en Cali y en otras ciudades. También es cierto que muchos refugiados debían establecerse en terrenos de invasión con el riesgo de suscitar la reacción violenta de la policía. Pero esos refugiados podían por lo menos sustraerse a la influencia de sus antiguos gamonales y otros gestionarios locales de la violencia.

En la actualidad las cosas acontecen de otra manera. Las ciudades ya no representan un refugio y los desplazados no pueden soñar con escapar a la influencia de los protagonistas que han conocido en el lugar de la partida y menos aún de los que actúan en el medio urbano. Ya no hay espacios libres de la influencia de las redes informales o ilegales de poder en Colombia.

Estas redes pueden estar formadas por bandas juveniles, por milicias que controlan los barrios, por individuos que mantienen contacto con la guerrilla o con los paramilitares. Puede tratarse también sencillamente de las organizaciones que asumen la voz de asentamientos de desplazados. Entre todas estas redes las interferencias son muchas. No faltan los casos en los cuales los desplazados por la acción de los paramilitares y por la acción de las guerrillas se encuentran instalados los unos cerca de los otros, lo que agudiza todavía más las tensiones. En cualquiera de estas condiciones se hace difícil la emergencia de lazos que den cohesión a los desplazados.

La situación, entonces, no es muy diferente de la que tenían cuando partieron. Prevalece nuevamente la desconfianza, los rumores circulan, es cotidianamente posible la incursión de uno o de otro grupo, la sensación de ser espiados por los agentes de cada uno de los bandos es general. Los desplazados pueden considerarse como rehenes ya que de un día para otro pueden ser instrumentalizados en función de planes que no son los suyos. Mientras tanto, alimentan los argumentos de cada bando para denunciar los desmanes del otro.

No sólo son rehenes sino también sospechosos. Lo son a los ojos de la población que está alrededor de los asentamientos y se preocupa por el desorden provocado por los nuevos habitantes urbanos. Lo son igualmente para las autoridades, convencidas que su instalación favorece la intromisión de los grupos armados y no saben qué medidas tomar, dudando como lo hemos señalado, entre aceptar su instalación definitiva y presionar para hacerlos regresar al punto de partida. Lo único claro para esas autoridades es que están en frente de un problema social explosivo, más aún cuando el desempleo masivo hace ilusoria la posibilidad de empleo de los recién llegados en la ciudad. La manera como las autoridades han delimitado los asentamientos, alejándolos lo más posible del centro de la ciudad, muestra la intensidad de esta manera de ver las cosas, sin atenuar con ello el desorden ocasionado.

Se comprende perfectamente por qué tantos refugiados se esfuerzan por escapar a su condición, buscando introducirse individualmente en la ciudad, solos o con la ayuda de parientes. Esfuerzos que pueden ser exitosos si se poseen los medios para empezar una actividad económica. Pero el motivo principal es sin duda otro. Manifiestan el deseo de escapar a la condición de rehenes y de sospechosos así como el de sustraerse de las redes informales que se encuentran en las ciudades; el deseo, en fin, de huir de la violencia. Se constata nuevamente un proceso de individualización, esta vez inducido por la estrategia de fundirse en la ciudad.

Cuando existe una organización colectiva, la violencia puede aparecer en cualquier momento. Si no es posible abandonar los vínculos con el grupo para probar suerte, conviene al menos limitar los contactos a familias y conocidos de mucho tiempo, participando lo menos posible en la organización para evitar el riesgo de ser tildados una vez más como “activistas”.

7. Observaciones finales

Hanna Arendt dice que no hay ley para los apátridas. Si se ha hecho una ley específica para los desplazados, estos saben que tal ley no sirve sino para los miembros especializados de la “sociedad civil” quienes hablan por ellos. No modifica su suerte y tampoco impide que estén sometidos a otras leyes de hecho, que hacen prevalecer los actores que disponen de la fuerza y de otros medios de coerción.

Desde el punto de vista de las autoridades y de los observadores, los desplazados constituyen un problema social y político. La coyuntura económica actual no permite esperar que el problema

social pueda ser resuelto pronto y la coyuntura política no ofrece tampoco muchas razones para el optimismo. La guerra puede durar y, con ella, el flujo de nuevos desplazados.

En estas condiciones, es sin duda necesario reflexionar sobre lo que implica la experiencia misma del desplazamiento. Esta se inserta en una historia más amplia, donde el desplazamiento constituye una prueba repetitiva. Si las estrategias de los desplazados se ubican en el corto plazo, el imaginario que las subtiende remite a representaciones instaladas en la larga duración. Sobre el telón fondo de la violencia y de las migraciones sucesivas, una ciudadanía nunca conseguida aparece, nuevamente, fuera de alcance.

La Violencia de los años cincuenta es el origen de un traumatismo que no ha encontrado jamás un lugar en una historia colectiva que le habría dado, si no una justificación, al menos un sentido. El riesgo de que suceda lo mismo con la violencia actual es grande, porque los factores que la alimentan y las interacciones entre los actores son aún más heterogéneos y complejos que los de los años cincuenta. En esa época se podía soñar con que, más allá de la catástrofe vivida, las víctimas podían beneficiarse de un proceso de modernización que se daba en el ámbito mundial. No pasa lo mismo ahora, con la crisis de los procesos de modernización y la pérdida de sentido que se experimenta en el conjunto de las sociedades.

Tampoco es posible pensar que un acuerdo de paz puede poner término a la violencia. El desajuste de las relaciones sociales y políticas durante el período reciente ha sido demasiado profundo como para que pueda creerse que la violencia desaparecerá por la mera decisión de los actores organizados.

Resolver el problema de los desplazados, implica nada menos que rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez, una sociedad y sus instituciones. La nación ha permanecido siempre incompleta; hoy está hecha pedazos.

Lo que significa que la tarea va más allá del tiempo de un gobierno y aún del tiempo de quienes todavía piensan sinceramente que el uso de la violencia puede llevar a algo mejor.